

Eliminar correos electrónicos puede costar una carrera política

Escándalo en Ontario al descubrirse una práctica sistemática de destrucción de documentos públicos

ALEJANDRO SANTIAGO



En octubre de 2012, el primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, Dalton McGuinty, anunciaba que iba a renunciar a su puesto en cuanto su partido hubiera elegido a su sustituto para ejercer el cargo. En los meses posteriores, el Partido Liberal de Ontario se vio inmerso en un proceso de primarias en el que fue elegida Kathleen Wynne. McGuinty dejó el gobierno el 11 de febrero de este año. Cuatro me-

ses después incluso abandonó su escaño y puso fin a 23 años de presencia parlamentaria, los últimos diez como *premier* de Ontario.

Su renuncia, apenas un año después de haber sido elegido por tercera vez como *premier*, ha sacudido enormemente la escena política en Ontario, la provincia más poblada de Canadá, en cuyos límites vive en torno al 40% de la población total del país. Lo

curioso de este caso es que su renuncia se ha debido irónicamente a una jugada electoral que le permitió ganar las elecciones de 2011. Pero para explicar todo el proceso desde el principio es preciso que nos remontemos al año 2009.

En el año 2009, la Autoridad de la Energía de Ontario comenzó la construcción de dos centrales eléctricas en los municipios de Mississauga y Oakville, ambas poblaciones



cercanas a Toronto. La construcción de estas centrales provocó malestar entre los habitantes de esas ciudades que pronto se convirtieron en acciones de protesta constantes contra las mismas. Esta lucha ganó apoyos entre diferentes sectores de la sociedad de Ontario y durante los años posteriores ha estado en la agenda política de la provincia. Desoyendo las protestas, las autoridades decidieron continuar con el proyecto. En las elecciones de 2011, Dalton McGuinty y el Partido Liberal de Ontario consideraron que la construcción de estas centrales podría perjudicar sus aspiraciones para mantener el gobierno de la provincia, ya que el resultado de las elecciones se antojaba muy ajustado. Durante la campaña electoral anunciaron que si renovaban el mandato, mandarían desguazar las centrales, que en ese momento aún no habían entrado en funcionamiento, pero su construcción estaba avanzada.

Esta promesa permitió que el Partido Liberal de Ontario ga-

nara en las circunscripciones afectadas en las elecciones celebradas el 6 de octubre de 2011. McGuinty obtuvo el 42% de los votos, lo que le permitió ser investido como *premier* con un gobierno en minoría. Poco después cumplió su promesa y las construcciones de las centrales fueron demolidas.

La decisión no contentó a todas las partes y a principios de 2012 la corporación estadounidense EIG, inversora del proyecto, anunciaba una demanda contra el gobierno de Ontario reclamando 300 millones de dólares canadienses como indemnización, lo que equivale a unos 215 millones de euros. Esto supuso un duro golpe para el gobierno, pero lo peor aún estaba por llegar.

La oposición solicitó al entonces Ministro de Energía de Ontario, Chris Bentley, que hiciera pública la documentación relativa a este proceso ya que se estaba extendiendo la idea de que pudo haber irregularidades en el proyecto. Si bien en un principio Bentley no estaba por la labor, la amenaza de

afrontar cargos por desacato al parlamento hizo que accediera e hiciera públicos 36.000 documentos relacionados con la construcción y posterior desmantelación de las centrales. A pesar de que Bentley declaró que esa era toda la documentación disponible, poco después se supo que había ocultado miles de documentos y que muchos de los documentos hechos públicos habían sido modificados para ocultar los costes reales del proyecto.

Fue en ese momento cuando McGuinty anunció su renuncia, iniciativa que fue seguida por Bentley, dejando ambos el gobierno al mismo tiempo. Habitualmente suele suceder que en el juego parlamentario el sacrificio de una carrera política sirva para dar por zanjado un escándalo. Afortunadamente, en este caso no ha sucedido eso y la investigación parlamentaria ha continuado.

A petición de la oposición, el Auditor General de Ontario (figura independiente que audita la operaciones del gobierno provincial) declaró que el

coste para las arcas públicas del cierre de la central de Mississauga se podía estimar en 275 millones de dólares o, lo que es lo mismo, algo menos de 200 millones de euros y que el coste del cierre de la central de Oakville se podía estimar en una cifra similar. Esto ha provocado que el déficit económico de Ontario haya crecido desbaratando los planes de McGuinty, quien prometió reducirlo, creando una fuerte co-

mismo tiempo, McLennan destruía semanalmente la documentación en papel, justificando esta práctica en tener más espacio en su despacho.

A estas alturas, todos estos hechos se conocen en Ontario como el escándalo de las centrales eléctricas. Según las leyes de Ontario, y que todo empleado público debe cumplir, la destrucción de esa documentación es totalmente ilegal ya que tienen la obligación de

emails borrados por mandato del parlamento, pero la realidad es que no está siendo posible recuperar la inmensa mayoría de emails por ser un proceso muy complejo y costoso. Además, el gobierno no dispone de un servicio de copias de seguridad de los emails, lo cual incumple sus propias leyes.

La cuestión ahora es probar que los jefes de gabinete no actuaron por su cuenta sino siguiendo instrucciones de Mc-



rriente de opinión en su contra, ya que la oposición lo acusa de haber desperdiciado ese dinero por no haber detenido el proyecto antes de que comenzara a construirse.

Durante la investigación parlamentaria se ha descubierto un hecho que ha indignado enormemente a la sociedad de Ontario. El que fuera jefe de gabinete del ex ministro Bentley, Craig McLennan, estableció una práctica sistemática que consistía en eliminar diariamente los emails producidos y recibidos por Bentley. McLennan afirma que lo hizo solo para poder tener espacio en el servidor de correo electrónico y que su práctica no tuvo intención de ocultar nada. Pero curiosamente, fueron destruidos los emails que contenían información que podía resultar embarazosa para su jefe. Al

conservar toda la documentación producida en el ejercicio de sus funciones. McLennan afirma que él siempre pensó que los emails se almacenaban en algún sitio, pero que no sabía dónde. También se ha sabido recientemente que el jefe de gabinete de McGuinty preguntó a los empleados públicos que trabajaban en su gabinete cómo se podía borrar completamente una cuenta de correo electrónico y su contenido. En un gesto valiente por parte de estos empleados, antes de que McGuinty abandonara el gobierno, decidieron ocultar todos los teléfonos móviles, discos duros y ordenadores pertenecientes a McGuinty para que no pudieran ser destruidos.

La Comisionada para la Información y la Privacidad está investigando el caso de los

Guinty y Bentley para que no se sepa el coste real de la cancelación de las centrales. La Policía de Ontario ha abierto una investigación de oficio por un delito de destrucción de documentación pública que puede estar castigado con la cárcel.

La conclusión que podemos sacar de estos hechos es que ambos políticos dimitieron por el coste político del gasto en el proyecto de las centrales energéticas, sin embargo, su mayor problema ya no es ese, sino no haberse tomado suficientemente en serio las leyes de conservación de documentación pública. Resulta interesante ver que lo que ellos consideraban un asunto menor va a ser el que les traiga más quebraderos de cabeza. Y todo por haber seguido una táctica electoral para poder ganar las elecciones. ■